

MODIFICACION DE MEDIDAS. SE IMPONE A LA MADRE EL RETORNO DE LA MADRE DE CANTABRIA A VALLADOLID DE LOS DOS HIJOS MENORES. La madre se lleva a sus hijos de 7 y 14 años sin autorización del padre de Valladolid a Cantabria y los matricula en un colegio sin autorización del padre. La madre insta demanda de modificación de medidas y el padre RECONVIENE y solicita que la madre regrese de Cantabria con los dos hijos cuando finalice el curso escolar, que se acuerde la custodia compartida de los dos menores. La Audiencia acuerda el retorno de la madre a Valladolid, y la custodia exclusiva para la madre de la hija de 14 años y la custodia compartida del hijo menor **destacando dicho Equipo que la madre ha venido interfiriendo y obstruyendo la relación paterno-filial**), y n relación con la guarda y custodia compartida de Íñigo, que el Ministerio Fiscal consideró lo mas beneficioso para el mencionado menor a la vista dela prueba practicada, cabe destacar que dicha custodia compartida se fundamenta en la resolución recurrida, en que " En **relación con Íñigo**, se ha destacado claramente la mediatización de la madre (y de la hermana) en las propias expresiones vertidas en la entrevista que realizó ante la psicóloga y trabajadora social del equipo psicosocial, **del propio discurso del menor se infiere, como dice el informe psicosocial involucración en el conflicto parental**, llegando a relatar supuestos hechos desajustados por parte de su padre que carecen de credibilidad. Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 4 octubre 2021. Número Sentencia: 371/2021
Número Recurso: 228/2021 Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#) .Origen instancia 3

Cabecera: Guarda y custodia compartida o conjunta. Guarda y custodia de hijo menor de edad. Modificación de medidas definitivas en el ambito familiar

En relación a la guarda y custodia debe recordarse que la **guarda y custodia compartida** no es un medida excepcional, sino que, especialmente a partir de la sentencia del tribunal supremo, de 29 de abril, se considera como la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación con ambos progenitores (sentencia del tribunal supremo, de 30 de octubre) ; a lo que debe añadirse, que el analisis de las cuestiones sobre la **guarda y custodia de los menores debe** contemplar siempre el prevalente interes del menor, o, en otras palabras, el fin último del **artículo 92 codigo civil** es posibilitar la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de estos.

PROCESAL: Reconvencion

Jurisdicción: Civil

Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 04/10/2021

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 371/2021

Número Recurso: 228/2021

Numroj: SAP VA 1554:2021

Ecli: ES:APVA:2021:1554

ENCABEZAMIENTO:**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1****VALLADOLID****SENTENCIA: 00371/2021**

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 **Fax:** 983413482/983458513**Correo electrónico:**

Equipo/usuario: MGR

N.I.G. 47186 42 1 2014 0008855**ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000228 /2021****Juzgado de procedencia:** JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VALLADOLID**Procedimiento de origen:** MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO
CONTENCIOSO 0000325 /2019

Recurrente: Victoria

Procurador: OSCAR JUAN ABRIL VEGA

Abogado: JAVIER DOMINGUEZ ROJO

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Ángel Jesús

Procurador: , FERNANDO RUIZ LOPEZ

Abogado: , HORACIO PARRILLA LEOZ

SENTENCIA num. 371/2021

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO SALINERO ROMAN

D^a EMMA GÁLGERAN SOLSONA

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS

En VALLADOLID, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de procedimiento de modificación de medidas supuesto contencioso nº 325/2019 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Valladolid, seguido entre partes, de una como **DEMANDANTE-APELANTE**: D^a Victoria, representada por el Procurador D. OSCAR JUAN ABRIL VEGA y defendido por el letrado D. JAVIER DOMINGUEZ ROJO, y de otra como **DEMANDADO-APELADO**: D. Ángel Jesús, representado por el Procurador D FERNANDO RUIZ LOPEZ y defendido por el letrado D. HORACIO PARRILLA LEOZ ; con intervención como apelado del MINISTERIO FISCAL; sobre modificación de medidas.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 27/01/2021, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Que desestimo la demanda principal de modificación de medidas interpuesta por el procurador Don Óscar Juan Abril Vega, en nombre y representación de DOÑA Victoria, frente a DON Ángel Jesús, representado por el procurador Don Fernando Ruiz López, y estimo parcialmente la demanda reconvencional formulada a la inversa, acordando modificar la medida relativa

- a la guarda y custodia,
- régimen de comunicaciones y visitas,
- y pensión de establecidas en la sentencia de divorcio de fecha 22 de julio de 2014, autos de divorcio de mutuo acuerdo nº 561/2014, quedando fijada de la siguiente forma:

1.-Domicilio familiar Doña Victoria y sus hijos debe regresar a DIRECCION000 una vez finalice el curso escolar 2020/2021. Se fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite. Doña Victoria no tenía el consentimiento del padre de sus hijos ni autorización judicial para realizar el cambio de residencia de DIRECCION000(Valladolid) a DIRECCION001(Cantabria).

2.-Guarda y custodia de los hijos:

a) La guarda y custodia de Leticia se mantiene en exclusiva a favor de Doña Victoria.

b)La guarda y custodia de Íñigo será exclusiva de la madre hasta que finalice el curso escolar en Cantabria y a partir del 1 de julio de 2021 se establecerá una custodia compartida por ambos progenitores que se llevará a cabo por semanas alternas, realizando

el intercambio los lunes en el centro escolar. En caso ser el lunes festivo o existir puente el intercambio se realizará el primer día lectivo.

3.-En cuanto al régimen de visitas y comunicación con el progenitor no custodio se acuerda lo siguiente:

A.-En relación con Leticia: Al mantener la custodia la madre ,en atención a la influencia materna de la menor y al rechazo frontal que tiene a relacionarse con su padre, se acuerda un régimen de visitas progresivo, en concreto que las visitas se realicen durante tres meses en Aprome los sábados alternos de 18 a 20 horas(visitas tuteladas por un técnico de Aprome) debiendo comenzar las mismas en el mes de febrero de 2021, y a partir del cuarto mes las visitas serán los sábados alternos de 12 a 20 horas, siendo las entregas y recogidas en Aprome Valladolid y a partir del mes septiembre de 2021 serán los sábados y domingos de 12 a 20 horas(sin pernocta),con entregas y recogidas en Aprome. El punto de encuentro deberá realizar informes trimestrales sobre la evolución del régimen de visitas entre Leticia y Don Ángel Jesús.

B.-En relación con Íñigo se establece un régimen de visitas con su padre hasta que el 1 de julio de 2021,fecha en que se instaura la guarda y custodia compartida(y se suprimen las visitas).El régimen de visitas consistirá en fines de semana alternos desde el sábado a las 12 al domingo a las 20 horas. Las entregas y recogidas se realizarán en Aprome Valladolid. Durante las vacaciones de verano de este año se acuerda que los meses de Julio y Agosto se disfruten por mitad entre los progenitores por semanas alternas para que el menor vaya adaptándose a la nueva situación. La madre será la encargada y asumirá los gastos de traer a los menores a Valladolid para la realización delas visitas hasta el 30 de junio de 2021 ,momento en que deberán estar instalados en DIRECCION000. En cuanto a las vacaciones de Navidad y Semana Santa se distribuirán por mitad entre los progenitores e igualmente las vacaciones de verano de los años posteriores(julio y agosto, disfrutándose por quincenas alternas).En relación con la elección de los periodos vacacionales en caso de desacuerdo sobre su distribución, los años impares escogerá la madre y los pares el padre

.4.-Pensión de alimentos de los hijos: En el presente caso la pensión de alimentos hasta el 30 de junio de 2021 se mantiene la establecida en su día en el convenio regulador de 29 de mayo de 2014,que aprobó la Sentencia de Divorcio de fecha 22 de julio de 2014,A partir del 1 de julio de 2021, la pensión de alimentos de Leticia se mantiene al seguir teniendo atribuida Doña Victoria la custodia exclusiva de la misma. En cuanto a Íñigo, al pasarse de un sistema de custodia exclusiva de la madre a un sistema de custodia compartida, se deja sin efecto la establecida en la sentencia de Divorcio y se acuerda que los gastos de manutención, vivienda y vestido se abonen por mitad, al igual que los gastos ordinarios escolares, debiendo el padre abonar en concepto de alimentos a la madre la cantidad de 100 euros mensuales, en atención a la diferencia de ingresos entre ambos, dicha cantidad se actualizará anualmente conforme a las variaciones que experimente el I.P.C. u Organismo que lo sustituya y se abonará en la forma que venía realizándose el pago a Doña Victoria.

5.-El equipo psicosocial deberá realizar un informe semestral sobre la situación relativa a la guarda y custodia de los menores y al desarrollo del régimen de visitas

.6.-Se mantiene el resto de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio. Cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de la parte demandante se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la por la representación de la parte demandada y por el Ministerio Fiscal se presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 16 de septiembre de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D^a EMMA GÁLCEERÁN SOLSONA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- En la sentencia de fecha 15 de febrero de 2021, RPL-374/2020, dictada por esta Sala se declaró: " En esta materia, régimen de guarda y custodia, la doctrina jurisprudencial que cabe destacar es la contenida en las SS.TS. de 22 de julio de 2011, 29 de abril de 2013, 19 de julio de 2013 29 de noviembre de 2013, 2 de julio de 2014, 16 de febrero de 2015, 17 de enero de 2018, 30 de octubre de 2018, entre otras, que ha sido analizada por el Juzgador de instancia, declarando la sentencia de primera instancia, FD. Primero, "Debe recordarse que tanto la patria potestad como el conjunto de actuaciones y medidas que se adopten respecto de los menores han de guiarse, como principio general y prevalente a cualesquiera otros en juego, incluido el de los padres o allegados, por el superior interés y beneficio del menor, como expresamente recogen los arts. 92, 103, 154, 158, 161 172 y 176 del Código Civil, los arts. 2.1 párrafo 1º (*"Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir "*) y 11.2 a) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (*" En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño "*), el art. 15 de la Carta Europea de los Derechos del Niño aprobada por Resolución A 3-0172/92, de 8 de julio (*" Toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses "* -DOCE nº C 241, de 21 de septiembre de 1992-)."

"El art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero , en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, **apunta como criterios generales a tener en cuenta en orden a la**

interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, por este orden":

- a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.
- b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.
- c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia...

"La Constitución española impelió al poder legislativo a la promulgación de la normativa necesaria para la protección del menor, siendo la más significativa, de inicio, en este orden la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores. Más adelante se promulgó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, Ley de Protección Jurídica del Menor. Estas dos leyes son las que vienen a modificar de forma sustancial en el ordenamiento jurídico estatal el régimen de protección del menor de edad. Toda esta normativa se ha visto poderosamente influenciada por los textos internacionales que se han ocupado de la protección de los menores, de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos del Niño (Nueva York 1959) y la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 20 de noviembre de 1989). En toda la normativa internacional y estatal mencionada late el superior interés del menor como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte, si bien dicho interés superior no aparece definido, precisándose su configuración y concreción en cada caso. Se configura, pues, como un verdadero concepto jurídico indeterminado, que la doctrina ha venido relacionando bien con el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico y su afectividad, junto a otros aspectos de tipo material; bien, simplemente con la protección de sus derechos fundamentales."

"En relación a la guarda y custodia debe recordarse que la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que, especialmente a partir de la STS nº 257/2013, de 29 de abril, se considera como la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación con ambos progenitores (STS nº 593/2018, de 30 de octubre); a lo que debe añadirse, que el análisis de las cuestiones sobre la guarda y custodia de los menores debe contemplar siempre el prevalente interés del menor, o, en otras palabras, el fin último del art. 92 CC es posibilitar la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de éste."

"Con esta premisa inicial deben de fijarse para determinar el régimen de guarda más adecuados criterios tales como:

- 1ª-la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales;
- 2ª-los deseos manifestados por los menores competentes;
- 3ª-el número de hijos;
- 4ª el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales;
- 5ª-el resultado de los informes exigidos legalmente, las circunstancias personales, laborales y económicas concurrentes y;
- 6ª- cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada para el correcto desarrollo de su personalidad.

Con estas premisas iniciales la STS de 19 de julio de 2013 establece : " se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil , ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel". Lo que se pretende con un posible régimen de custodia-compartida es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, (Sentencia 2 de julio de 2014, rec. 1937/2013), pero ello siempre que al mismo tiempo se aprecie como más beneficioso para los menores ". "

SEGUNDO.- Como ha declarado esta Sala en relación con la naturaleza del recurso de apelación, entre otras, en la sentencia de 27 de noviembre de 2018, RPL-252/2018, "la más adecuada solución del mismo determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8

febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002)."

Y en relación con la eficacia de la prueba de peritos, la Sala Primera tiene declarado (STS. de 22 de febrero de 2006, RC Nº 1419/1999), que el juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar esta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito (STS. de 16 de octubre de 1980), de las que pueden prescindir (STS. de 16 de febrero de 1994).

En relación con dicha cuestión, tiene declarado la jurisprudencia, asimismo, que los tribunales, al valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica (art. 348 de la LEC), deberán ponderar los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en las declaraciones de los peritos, pudiendo no aceptar el Tribunal el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro; debiendo también tenerse en cuenta las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes de peritos designados por las partes, como de los emitidos por peritos designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes, debiéndose examinar igualmente las operaciones periciales que se hayan realizado concretamente, los medios, métodos o instrumentos empleados y los datos en que se sustenten los dictámenes, así como la competencia profesional de sus autores y las circunstancias que hagan presumir su objetividad (SS.TS de 10 de febrero de 1994, 28 de enero de 1995, 31 de marzo de 1997, 30 de noviembre de 2010, 15 de diciembre de 2015, 17 de mayo de 2016, entre otras muchas).

TERCERO.- En orden a resolver el recurso de apelación, debe tenerse en cuenta, después de precisar que **ninguna irregularidad se aprecia por la intervención del Juez de refuerzo, además de la del Juez titular**, que en el caso de autos quien recurre la sentencia es la madre de los menores, Leticia y Íñigo, alegándose en el recurso la errónea valoración de la prueba, afirmándose que la parte apelante ha actuado con el fin de preservar la salud y bienestar de los menores, aludiendo a las situaciones de violencia causadas por el padre de los menores, alegando que esas situaciones, pese a haberse archivado las dos denuncia interpuestas por la madre de los menores, **no dejan lugar a dudas según la parte apelante**, sobre la consideración beneficiosa de lo solicitado por la apelante, el mantenimiento de la atribución exclusiva a la madre de la guarda y custodia de los menores, la concesión del cambio de domicilio y nuevo régimen de visitas, y demás medidas solicitadas por la madre, entre otras consideraciones efectuadas por dicha parte.

Sentado lo precedente, en **cuanto al régimen de guarda y custodia de los menores**, la sentencia de primera instancia establece un sistema diferenciado entre Leticia y Íñigo, acordando mantener en exclusiva la guarda y custodia de **Leticia, de 14 años de edad**, a favor de su madre, con base en la motivación contenida en la sentencia, y respecto del hijo **Íñigo, de 7 años de edad**, la sentencia establece a partir del 1 de julio de 2021 una custodia compartida por semanas alternas, con los detalles consignados en la mencionada sentencia de primera instancia (**la conclusión del equipo psicosocial fue favorable a la**

custodia compartida por semanas alternas para los dos menores, destacando dicho Equipo que la madre ha venido interfiriendo y obstruyendo la relación paterno-filial), y n relación con la guarda y custodia compartida de Íñigo, que el Ministerio Fiscal consideró lo mas beneficioso para el mencionado menor a la vista dela prueba practicada, cabe destacar que dicha custodia compartida se fundamenta en la resolución recurrida, en que " En **relación con Íñigo**, se ha destacado claramente la mediatización de la madre (y de la hermana) en las propias expresiones vertidas en la entrevista que realizó ante la psicóloga y trabajadora social del equipo psicosocial, **del propio discurso del menor se infiere, como dice el informe psicosocial involucración en el conflicto parental**, llegando a relatar supuestos hechos desajustados por parte de su padre que carecen de credibilidad. **El menor desconoce el motivo de su traslado a Cantabria**, "no sé porque nos hemos ido".

El menor al entrar en la entrevista habló unos instantes con el padre y al finalizar la entrevista se despidió de su padre.

No se apreció en el menor por parte del equipo una actitud de alejamiento de la figura paterna, ni se detectan sentimientos de angustia ni terror".

" Por ello esta Juzgadora considera en **relación con Íñigo que** hasta que finalice el curso escolar en Cantabria deberá mantenerse la custodia exclusiva de la madre, y a partir del 1 de julio de2021 en que deberán los menores estar residiendo en DIRECCION000, se establecerá una custodia compartida del menor por ambos progenitores, por semanas alternas realizándose el intercambio los lunes en centro escolar, en caso de ser festivo el lunes o existir puente esa semana, el intercambio se llevará a efecto el primer día lectivo."

" La psicóloga y la trabajadora social del equipo psicosocial en las aclaraciones realizadas el dia de la vista consideran que es necesario por el bien de los hijos que la custodia compartida entre en funcionamiento cuanto antes, si bien, esta Juzgadora atendiendo al rechazo de los mismos a su padre ,al tiempo que llevar sin tener contacto con él y a quellevan residiendo año y medio en otra Comunidad donde se encuentran escolarizados debe establecer el cambio de forma gradual como se ha recogido anteriormente".

" Don Ángel Jesús es un padre que quiere participar en la vida de sus hijos de forma más activa y que conoce las necesidades de estos, es cierto que la relación con Leticia es difícil de recuperar pero en relación con Íñigo es más viable que la relación padre e hijo se recupere, siempre que la actitud de la madre cambie y favorezca las relaciones de sus hijos con su padre, por ello la custodia compartida de Íñigo es la opción más adecuada en el presente caso, permitiendo con ello asegurar el mantenimiento del doble vinculo parental, y permitiendo que ambos padres participen activamente en la crianza y compartan las responsabilidades de su hijo situándose en una posición de igualdad en derechos y deberes en relación con éste.", junto a otras consideraciones.

De lo expuesto resulta que no cabe apreciar en la resolución de primera instancia ninguna de las notas o características negativas, a que alude la doctrina jurisprudencial reseñada en el F.D.

Segundo de la presente sentencia, acerca de la valoración de la prueba, con la consiguiente desestimación de la alegada errónea valoración de la prueba, pues quedó acreditado que en relación con el menor Íñigo, la sentencia establece la alternativa que proporciona mayor estabilidad al menor, en el desarrollo evolutivo en sus diferentes aspectos afectivos, sociales, intelectuales, emocionales, psicomotores y de lenguaje, habiendo tenido en cuenta la sentencia la prueba practicada y valorado las circunstancias concurrentes en el caso examinado acertadamente a la luz de la doctrina jurisprudencial en la materia, que fue sintetizada en el F.D. Primero de la presente sentencia, argumentación que es aplicable asimismo a los pronunciamientos relativos al régimen de visitas y comunicación, a domicilio familiar, y al resto de pronunciamientos, y en este sentido **debe ponerse de relieve el arraigo de los menores en DIRECCION000**,

- donde siempre han residido y donde se encuentra la familia materna y paterna,
- teniendo la madre de los menores una vivienda de su propiedad, habiéndose llevado la madre a los menores a otra vivienda que la madre tiene en DIRECCION001, Cantabria, sin consentimiento del padre y sin autorización judicial habiéndolos matriculado en un centro escolar de esta última localidad sin autorización del padre y sin su firma con la finalidad de separarlos del padre,
-

por lo que procede confirmar dichos pronunciamientos, e **igualmente confirmar los pronunciamientos relativos a la necesidad de decisión de muto acuerdo sobre algunos aspectos de la vida de los menores**, al no acreditarse ningún motivo para modificar los términos en que se redactó el convenio regulador por la necesidad de que ambos progenitores participen en la toma de decisiones importantes sobre sus hijos, debiendo tener presente, por otra parte, que no se acreditó modificación de la situación económica de los progenitores ni mayores necesidades de los menores que en la fecha del divorcio, procediendo confirmar los pronunciamientos referidos a la pensión de alimentos, así como los restantes contenidos en la sentencia de primera instancia, pues todos se basan en la valoración adecuada de las circunstancias concurrentes en el concreto caso de autos así como en la actual jurisprudencia en la materia, como antes se indicó, por todo lo cual, la sentencia debe ser confirmada con desestimación del recurso interpuesto.

CUARTO.- Procede imponer a la parte apelante las costas del recurso de apelación conforme al art. 398-1 LEC al haber sido destinado.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Oscar Juan Abril Vega en representación de D^a Victoria, frente a la Sentencia de fecha 27/01/2021, confirmándola íntegramente, con imposición a la parte apelante las costas del recurso de apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.